



Quito, D. M., 05 de agosto de 2015

SENTENCIA N.º 249-15-SEP-CC

CASO N.º 1373-11-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La presente acción extraordinaria de protección ha sido propuesta por el doctor Renán Mosquera Aulestia, procurador judicial y delegado del abogado Pedro Solines, superintendente de bancos y seguros, de conformidad con el artículo 94 de la Constitución de la República, mediante la cual impugna la sentencia expedida el 07 de febrero de 2011 a las 10h21, por los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección N.º 978-2010, propuesta por José Santos Boloña, por los derechos que representa de la compañía HISPANA DE SEGUROS S. A., en contra de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el proceso N.º 978-2010 fue remitido a esta Corte mediante oficio N.º 384-2-S-P-G del 04 de agosto de 2011, suscrito por la abogada Martha Gómez Lapierre, secretaria relatora de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, certificó que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción, conforme consta de la certificación que obra a fojas 03 del proceso.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición, mediante auto expedido el 17 de enero de 2012 a las 15h21, aceptó a trámite la acción propuesta, como se advierte a fojas 04 y vuelta del proceso.

Efectuado el sorteo correspondiente, el juez sustanciador, mediante providencia expedida el 13 de abril de 2012 a las 09h26 (fojas 11 y vta.), avocó conocimiento de la acción y dispuso notificar a los jueces de la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas a fin de que presenten su

informe de descargo debidamente motivado sobre los fundamentos de la presente acción, así como al señor José Luis Santos Boloña, por los derechos que representa de la compañía Hispana de Seguros S. A., por ser parte en la acción de protección en que se expidió el fallo impugnado y al procurador general del Estado en calidad de tercero interesado, para los efectos previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

El 06 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional los jueces de la Primera Corte Constitucional, integrada conforme lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.

El Pleno del Organismo el 03 de enero de 2013, procedió al sorteo de las causas, correspondiéndole al juez constitucional Antonio Gagliardo Llor sustanciar el presente caso, conforme consta en el memorando de la Secretaría General de la Corte Constitucional N.º 004-CCE-SG-SUS-2013 del 07 de enero de 2013 por el cual se remite el expediente del caso (fojas 45 del expediente).

El juez sustanciador mediante providencia del 17 de enero de 2013 a las 09h05, avocó conocimiento de la presente causa, haciéndole conocer a las partes procesales la recepción del proceso (fojas 46).

Decisión judicial que se impugna

Guayaquil, 7 de febrero de 2011; las 10h21

VISTOS: (...) **CUARTO:** En la tramitación de la presente acción de protección, la Sala observa lo siguiente: a) El Juez a quo declara con lugar la acción de protección propuesta manifestando: "Se han vulnerado y violentado derechos consagrados en la Constitución del Ecuador y que protegen los derechos de la parte accionante, en particular los de seguridad jurídica y debido proceso, al momento de que ordena un pago sin que exista fundamento legal para aquello, es evidente que la contraprestación opera sólo cuando el contratante de seguro, cumple oportunamente con su obligación de satisfacer el costo de seguro (prima), que le permite exigir el derecho a estar cubierto por la póliza contratada, la falta de cumplimiento de esta obligación, excluye la obligación de cobertura por parte de la compañía de seguros, así mismo, es obligación de toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes, como norma de estricto cumplimiento, así como respetar las garantías determinadas en el numeral 7 del artículo 76 de la Constitución. No hacerlo constituye una vulneración al derecho constitucional del accionante" b) El contrato de seguro es un acuerdo de prestaciones mutuas dentro de los límites convenidos. Lo dice con claridad el artículo 1 del decreto supremo No. 1147 que forma parte de la codificación de la Ley General de Seguros. Que quede claro entonces que si una de las partes no cumple con su prestación, la otra no tiene que hacerlo, es decir, si el asegurado se encuentra en mora de la prima, el asegurador no tiene por qué indemnizar. Es un principio que rige el contrato de seguro principio que está contenido en la Ley de la materia y en las condiciones generales (cláusula sobre el pago



de la prima) y particulares (cláusula de pago de cuotas) del contrato que la actora suscribió con José Leonardo Abad Peñafiel. (...) La Superintendencia de Bancos y Seguros, ni en los actos impugnados ni en este proceso, ha desvirtuado que ordenó un pago sin verificar que el asegurado estaba al día en sus cuotas (mora en el pago) y, por lo tanto, violó el derecho al debido proceso de la parte actora; **QUINTO:** Si la Superintendencia de Bancos y Seguro ordenó el pago de una indemnización a un asegurado en mora del pago de la prima, ordenó un pago indebido que violenta el derecho a la propiedad. Revisando este segundo argumento. El derecho a la propiedad está reconocido y garantizado por el Art. 66 numeral 26 de nuestra Carta Magna que expresa "El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se la hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas (...): El derecho a la propiedad comprende la garantía de indemnidad que garantiza la conservación del patrimonio y prohíbe todo cobro indebido (...) **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA** (...) confirma la sentencia venida en grado (...).

Antecedentes fácticos que dieron origen a esta acción constitucional

La compañía Hispana de Seguros S. A., emitió la Póliza de Seguro de Vehículo N.º 0037674 a favor del señor José Leonardo Abad Peñafiel. El vehículo materia de la póliza sufrió un siniestro el 07 de abril de 2009, ocasionando daños materiales, lo que fue informado a la compañía de seguros. La nombrada compañía se negó a pagar la indemnización estipulada en la póliza, pues, según la compañía Hispana de Seguros S. A., el asegurado, al momento de producirse el siniestro, se hallaba en mora por el pago de las primas correspondientes. Ante esta situación, el asegurado José Abad Peñafiel presentó su reclamo ante la Superintendencia de Bancos y Seguros (a través de la Intendencia Regional N.º 1 en la ciudad de Cuenca), la cual, acogiendo el reclamo, dispuso que la compañía Hispana de Seguros S. A., pague la indemnización a favor de José Leonardo Abad Peñafiel por el valor de \$ 38.890,64 conforme lo estipulado en la póliza N.º 0037674, decisión que fue confirmada por la junta bancaria, ante el recurso de apelación propuesto por la mencionada aseguradora.

La resolución de la junta bancaria constante de fojas 4 al 9 del juicio N.º 861-2010 - Juzgado Tercero de Trabajo del Guayas, señaló, entre otras cosas, lo siguiente: **a)** Que el señor José Leonardo Abad Peñafiel probó la ocurrencia del siniestro por caso fortuito; **b)** Que la aseguradora negó el pago reclamado por el señor Abad Peñafiel por incumplimiento del pago de cuotas, conforme lo estipulado en la póliza N.º 0037674; **c)** Que el asegurado se quedó sin cobertura por la falta de registro oportuno de varias transacciones y por no contabilizar valores que el asegurado tenía a su favor ello, debido a que el asegurado había pagado oportunamente a un intermediario autorizado por la compañía Hispana de Seguros S. A., quien no había reportado los pagos hechos por el señor José Abad

Peñañiel, sin que esa omisión le sea imputable a este, ni pueda alegarse mora por parte de la aseguradora. Por tales razones, la junta bancaria, mediante Resolución N.º JB-2010-1797, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la compañía Hispana de Seguros S. A., y confirmó la resolución expedida por la Intendencia Regional de Cuenca de la Superintendencia de Bancos y Seguros que ordenó el pago de dicha indemnización a favor de José Leonardo Abad Peñañiel.

Inconforme con la resolución *ut supra*, la compañía HISPANA DE SEGUROS S. A., presentó demanda de acción de protección ante el juez tercero de trabajo del Guayas, órgano jurisdiccional que emitió sentencia aceptando la acción planteada y en consecuencia, dejó sin efecto jurídico la Resolución N.º JB-2010-1797 del 16 de septiembre de 2010. La entidad pública accionada interpuso recurso de apelación del fallo expedido el 30 de noviembre de 2010, el mismo que fue conocido y resuelto por los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el 07 de febrero de 2011, confirmando la sentencia venida en grado. Posteriormente, el procurador judicial y delegado del superintendente de bancos y seguros, presentó la acción extraordinaria de protección.

Detalle y fundamentos de la demanda

El accionante, procurador judicial y delegado del superintendente de bancos y seguros, en lo principal, manifiesta: Que la Superintendencia de Bancos y Seguros, de conformidad con lo previsto en la Constitución y la ley, tiene competencia para tramitar los reclamos administrativos presentados por los asegurados o beneficiarios de las pólizas de seguros contra las compañías aseguradoras, conforme lo previsto en el artículo 42 de la Ley General de Seguros, siendo la decisión de la Superintendencia susceptible del recurso de apelación para ante la junta bancaria, cuya resolución causa estado, conforme el artículo 70 *ibídem*.

Indica el legitimado activo, que en la Intendencia Regional de Cuenca de la Superintendencia de Bancos y Seguros tramitó el reclamo administrativo presentado el 04 de junio de 2009, por el señor José Leonardo Abad Peñañiel en contra de la compañía Hispana de Seguros S. A., por la negativa del pago de la póliza por el siniestro ocurrido el 07 de abril de 2009, con el vehículo marca HINO, por un monto asegurado de \$ 132.000,00, como se desprende de la Póliza de Seguro del Vehículo N.º 0037674.

Indica el accionante, que luego del trámite del proceso respectivo, en el cual la compañía aseguradora Hispana de Seguros ejerció el derecho a la defensa, el ingeniero Gustavo Muñoz González, intendente regional de Cuenca, emitió la



Resolución N.º IRC-2009-297 del 03 de septiembre de 2009, mediante la cual dispuso que la compañía Hispana de Seguros S. A., pague al señor Abad Peñafiel la suma de \$ 38.890,64 menos los descuentos pactados en el contrato de seguro por el referido siniestro.

Dice que la compañía Hispana de Seguros apeló esta resolución para ante la junta bancaria, organismo que mediante Resolución N.º JB-2010-1797 del 16 de septiembre de 2010, confirmó la resolución apelada, ratificando el pago de la póliza a favor de José Leonardo Abad Peñafiel, menos el descuento pactado en el contrato de seguro, por el siniestro ocurrido el 07 de abril de 2009, más el pago de intereses calculados a partir del 05 de junio de 2009, día siguiente a aquel en que vencieron los cuarenta y cinco días previstos en el artículo 42 de la Ley General de Seguros para pagar u objetar el pago de la indemnización.

Indica que la compañía Hispana de Seguros S. A., propuso acción de protección, mediante la cual impugnó la resolución de la junta bancaria y luego del trámite correspondiente, se declaró con lugar la acción por el juez tercero del trabajo del Guayas, por lo que la Superintendencia de Bancos y Seguros interpuso recurso de apelación, el mismo que fue conocido por los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

El demandante aduce que no es procedente proponer acción de protección contra actos que deben ser impugnados mediante acción contenciosa administrativa, conforme lo previsto en el artículo 173 de la Constitución de la República; pues, lo contrario implica que se la ha juzgado a la Superintendencia de Bancos y Seguros por parte de jueces que carecen de competencia, incurriendo en vulneración del derecho consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal k de la Constitución de la República.

Finalmente, alega el legitimado activo que el fallo impugnado desconoce el derecho de los asegurados y beneficiarios de pólizas de seguros, debido a las impugnaciones de las compañías de seguros contra las resoluciones del organismo de control, sometiendo a los asegurados y beneficiarios a aceptar sentencias en procesos judiciales (acción de protección) en que no han sido parte, impidiéndoles el derecho de recibir una indemnización derivada del contrato de seguros y sin permitirles que ejerzan su derecho a la defensa en tales acciones de protección.

Derechos constitucionales que se consideran vulnerados

Señala como derechos constitucionales vulnerados los consagrados en los artículos 75; 76 numerales 1 y 7 literales **a, c, k** y **l**; y 173 de la Constitución de la República.

Petición concreta

El accionante solicita que la Corte Constitucional declare la vulneración de los derechos constitucionales invocados y deje sin efecto la sentencia de mayoría expedida por los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas el 07 de febrero de 2011 a las 10h21, y notificada el 24 de febrero de 2011, en la acción de protección N.º 978-2010, así como la sentencia de primera instancia expedida por el juez tercero de trabajo del Guayas el 30 de noviembre de 2010, causa N.º 861-2010.

Contestación a la demanda

Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas (accionados)

Los legitimados pasivos no han remitido el informe requerido mediante auto del 13 de abril de 2012 a las 09h26, sobre los fundamentos de la presente acción, ni comparecieron a la audiencia pública convocada en la presente acción.

José Santos Boloña, gerente general de la compañía Hispana de Seguros S. A., (tercero interesado)

Tampoco el tercero interesado, José Santos Boloña, gerente general y representante legal de la compañía Hispana de Seguros S. A., compareció a la audiencia celebrada el 30 de abril de 2010 a las 09h30.

Procuraduría General del Estado

El abogado Jaime Cevallos Álvarez, director regional 1 (e) de la Procuraduría General del Estado, mediante escrito que obra a fojas 35 del proceso, se limita a ratificar las gestiones del abogado José Neira Rosero, quien intervino en la audiencia pública, y a señalar casilla constitucional, sin emitir pronunciamiento alguno sobre los fundamentos de la presente acción.



II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191 numeral 2 literal **d** de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 3 numeral 8, literal **b** y tercer inciso del artículo 35 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte Constitucional.


Legitimación activa

El artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, estatuye: "Legitimación activa.- La acción extraordinaria de protección puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte de un proceso por sí mismas o por medio de procurador judicial". En el presente caso, el superintendente de bancos y seguros se encuentra legitimado para presentar esta acción extraordinaria de protección, toda vez que, conforme se desprende del expediente de instancia, compareció como representante de la entidad pública accionada en la acción de protección, caso N.º 0861-2010.

Al haber sido aceptada la mencionada acción en dos instancias, el prenombrado accionante, en su condición de agraviado con las decisiones judiciales adoptadas, plantea esta acción constitucional, por lo que se constituye ahora en legitimado activo, más aún cuando los artículos 437 y 439 de la Constitución de la República, expresan que las acciones constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente. En tal virtud, le asiste la legitimación activa en esta causa.

Finalidad de la acción extraordinaria de protección

Según se preceptúa en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República¹, la finalidad de la acción extraordinaria de protección es el aseguramiento y


¹ Constitución de la República del Ecuador. Artículo 94.- "La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se haya agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado".



efectividad de los derechos y garantías constitucionales mediante el control de constitucionalidad, a fin de tutelar la supremacía de los derechos constitucionales, así evitar cualquier perjuicio en el que haya incurrido el accionar de los jueces ordinarios o constitucionales de instancia, sea por acción u omisión, en una sentencia, auto o resolución firme o ejecutoriado, en ejercicio de su actividad jurisdiccional.

Mediante la activación de esta garantía jurisdiccional, la Corte Constitucional determinará si en la decisión judicial impugnada, existe o no la vulneración del derecho al debido proceso y otros derechos constitucionales, ya que este es el objeto de esta acción que conlleva el control de constitucionalidad de las actuaciones de los jueces que con anterioridad a la vigencia de la actual Constitución de la República, se encontraban exentos del mismo; control que deviene del carácter normativo de la Norma Suprema y del principio de supremacía constitucional, según el cual, toda autoridad se encuentra sujeta al control de constitucionalidad.

Determinación del problema jurídico

La decisión judicial expedida por los jueces de la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el 07 de febrero de 2011, que confirmó la sentencia subida en grado, declarando con lugar la acción de protección, dejando sin efecto la Resolución N.º JB-2010-1797 emitida por la Junta Bancaria del Ecuador, el 16 de septiembre del 2010, ¿vulnera la garantía de la seguridad jurídica prevista en el artículo 82 de la Constitución de la República?

Resolución del problema jurídico

La decisión judicial expedida por los jueces de la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el 07 de febrero de 2011, que confirmó la sentencia subida en grado, declarando con lugar la acción de protección, dejando sin efecto la Resolución N.º JB-2010-1797 emitida por la Junta Bancaria del Ecuador, el 16 de septiembre del 2010, ¿vulnera la garantía de la seguridad jurídica prevista en el artículo 82 de la Constitución de la República?

Artículo 437 Ibídem.- "Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte Constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados. 2. Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución"



Dentro del modelo constitucional vigente en nuestro país, la seguridad jurídica se constituye en un derecho de vital importancia, puesto que garantiza la supremacía constitucional así como la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas, y aplicada por parte de los administradores de justicia.

El artículo 82 de la Constitución de la República consagra que: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas, previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.

Entonces, este derecho a garantizar el máximo respeto a la Constitución, tutela a su vez el respeto a los derechos reconocidos en la misma. Por lo que, la seguridad jurídica se constituye en el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana, en tanto consagra la correcta tutela de derechos, mediante el establecimiento de normas preexistentes dirigidas a todas las autoridades públicas a efectos de garantizar el respecto al ordenamiento jurídico vigente y con el deber de ser cumplidas por todos.

La Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia No. 020-15-SEP-CC determinó:

Según se desprende de la norma citada, la seguridad jurídica representa el elemento esencial y patrimonio común dentro de un estado de derecho, la cual garantiza una convivencia jurídicamente ordenada, una certeza sobre el derecho escrito y vigente, así como el reconocimiento y la provisión de la situación jurídica. Para aquello, se prevé que las normas que formen parte del ordenamiento jurídico se encuentren determinadas previamente, debiendo ser claras y públicas, teniendo siempre la certeza de que la normativa existente en el ordenamiento jurídico, será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos que generan la confianza acerca del respeto de los derechos consagrados en el texto constitucional².

Por lo que, la seguridad jurídica permite que las personas conozcan sus derechos y la normativa que rige la convivencia social, a efectos de que al momento de justiciar sus derechos lo hagan con la confianza y seguridad de que el sistema de justicia brindará una solución basada en normas previas, claras y exigibles como se lo mencionó anteriormente, es decir, brinda garantías a los ciudadanos con el fin de reestablecer sus derechos en caso de haber sido vulnerados, es por esto la importancia de este derecho.

Adicionalmente en cuanto a la seguridad jurídica la Corte Constitucional en la sentencia No. 230-14-SEP-CC señaló:

² Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 020-15-SEP-CC dictada dentro del caso N.º 0762-12-EP.

De ello se puede colegir que la seguridad jurídica constituye un derecho y una garantía que permite que el contenido, tanto del texto constitucional como de las normas que conforman el ordenamiento jurídico ecuatoriano, sean observadas y aplicadas en todas sus actuaciones por operadores jurídicos y por autoridades públicas investidas de competencia para ello, generando de esta forma en las personas la certeza respecto al goce de sus derechos constitucionales³.

La compañía Hispana de Seguros S.A., propuso acción de protección contra la Resolución No. JB-2010-1797 de la Junta Bancaria que rechazó el recurso de apelación y confirmó la expedida por la Intendencia Regional de Cuenca de la Superintendencia de Bancos y Seguros que ordenó el pago de la póliza de seguro del vehículo a favor de José Leonardo Abad Peñafiel. En primera instancia, el juez tercero de trabajo del Guayas aceptó la acción de protección dejando sin efecto la resolución impugnada. En segunda y definitiva instancia, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia, confirman la sentencia subida en grado. Aduciendo presuntas vulneraciones de derechos constitucionales en las decisiones judiciales *ut supra*, el superintendente de Bancos y Seguros plantea la presente acción extraordinaria de protección.

El control de constitucionalidad de la decisión judicial sometida en esta acción, determinará, si el asunto impugnado en la **acción de protección** era o no susceptible de conocimiento y resolución en la jurisdicción ordinaria, así como si se observó o no el debido proceso. En efecto, la *ratio decidendi* de la sentencia cuestionada, expresa lo siguiente:

CUARTO: En la tramitación de la presente acción de protección, la Sala observa lo siguiente: a) **El Juez a quo declara con lugar la acción de protección propuesta manifestando:** “Se han vulnerado y violentado derechos consagrados en la Constitución del Ecuador y que protegen los derechos de la parte accionante, en particular los de seguridad jurídica y debido proceso, al momento de que ordena un pago sin que exista fundamento legal para aquello, es evidente que la contraprestación opera sólo cuando el contratante de seguro, cumple oportunamente con su obligación de satisfacer el costo de seguro (prima), que le permite exigir el derecho a estar cubierto por la póliza contratada, la falta de cumplimiento de esta obligación, excluye la obligación de cobertura por parte de la compañía de seguros, así mismo, es obligación de toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes, como norma de estricto cumplimiento, así como respetar las garantías determinadas en el numeral 7 del artículo 76 de la Constitución. No hacerlo constituye una vulneración al derecho constitucional del accionante” b) **El contrato de seguro es un acuerdo de prestaciones mutuas dentro de los límites convenidos. Lo dice con claridad el artículo 1 del decreto supremo No. 1147 que forma parte de la codificación de la Ley General de Seguros. Que quede claro entonces que si una de las partes no cumple con su prestación, la otra no tiene que hacerlo, es decir, si el asegurado se encuentra en mora de la prima, el asegurador no tiene por qué**

³ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 230-14-SEP-CC dictada dentro del caso N.º 1823-10-EP.



indemnizar. Es un principio que rige el contrato de seguro principio que está contenido en la Ley de la materia y en las condiciones generales (cláusula sobre el pago de la prima) y particulares (cláusula de pago de cuotas) del contrato que la actora suscribió con José Leonardo Abad Peñafiel. (...) La Superintendencia de Bancos y Seguros, ni en los actos impugnados ni en este proceso, ha desvirtuado que ordenó un pago sin verificar que el asegurado estaba al día en sus cuotas (mora en el pago) y, por lo tanto, violó el derecho al debido proceso de la parte actora; **QUINTO:** Si la Superintendencia de Bancos y Seguro ordenó el pago de una indemnización a un asegurado en mora del pago de la prima, ordenó un pago indebido que violenta el derecho a la propiedad. Revisando este segundo argumento. El derecho a la propiedad está reconocido y garantizado por el Art. 66 numeral 26 de nuestra Carta Magna que expresa "El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se la hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas (...): El derecho a la propiedad comprende la garantía de indemnidad que garantiza la conservación del patrimonio y prohíbe todo cobro indebido (...)" (énfasis fuera del texto).

Como se puede apreciar en el literal **b** de la sentencia que expresa: "**El contrato de seguro es un acuerdo de prestaciones mutuas dentro de los límites convenidos. Lo dice con claridad el artículo 1 del decreto supremo N.º 1147 que forma parte de la codificación de la Ley General de Seguros. Que quede claro entonces que si una de las partes no cumple con su prestación, la otra no tiene que hacerlo, es decir, si el asegurado se encuentra en mora de la prima, el asegurador no tiene por qué indemnizar**" se utilizan argumentos de legalidad, lo cual denota que se está yuxtaponiendo cuestiones de legalidad por sobre vulneración o no a derechos constitucionales, lo cual desnaturaliza el objeto de una acción de protección de derechos.

En cuanto al numeral **QUINTO** de la sentencia objeto de análisis se observa: "Si la Superintendencia de Bancos y Seguros ordenó el pago de una indemnización a un asegurado en mora del pago de la prima, ordenó un pago indebido que violenta el derecho a la propiedad". Revisando este segundo argumento. El derecho a la propiedad está reconocido y garantizado por el Art. 66 numeral 26 de nuestra Carta Magna que expresa: "El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se la hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas", básicamente el operador de justicia lo que hace es enunciar la norma pero no se expresa en qué medida o no existe una afectación a derechos, tanto el juez *a quo* como los de *ad quem*, argumentan la sentencia a partir de los efectos del convenio de póliza de seguros, es decir, claramente se deduce que los hechos, las pretensiones, así como las supuestas vulneraciones constitucionales demandadas en la **acción de protección**, provienen del presunto incumplimiento contractual y de aplicación de la Ley General de Seguros.

Dentro del caso objeto de análisis se debe recordar que el mismo se circunscribe al análisis de la sentencia de apelación de una acción de protección de derechos; al respecto, la Constitución del Ecuador en su artículo 88, establece que la acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, se presenta cuando existe vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial que suponga la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales esto, complementado con el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el que manifiesta que esta garantía jurisdiccional tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en a la Constitución.

Debido a la naturaleza de la garantía jurisdiccional puesta en conocimiento de los operadores de justicia, aquellos al tratarse de una apelación de acción de protección tenían que observar las normas de la Constitución, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como la jurisprudencia de esta Corte Constitucional que rigen la acción de protección.

En este contexto, dada su naturaleza, el asunto es propio del ámbito de legalidad, controvertible en la jurisdicción ordinaria, ya que, en la vía constitucional, no le compete al juez de garantías jurisdiccionales resolver conflictos generados por la aplicación de la Ley General de Seguros, así como del contrato de póliza de seguros, este último constituye un acto de carácter privado. De ahí que, resulta improcedente la acción de protección, respecto de actos bilaterales, para lo cual, existen procedimientos que la ley franquea para tal efecto ante los jueces competentes en la justicia ordinaria.

En cuanto a esto, la Gaceta Constitucional N.º 5 del 27 de diciembre de 2013, emitida por la Corte Constitucional expresa que: “Resulta obvio que las garantías jurisdiccionales son mal utilizadas, cuando se desechan acciones de raigambre constitucional, sosteniendo que son cuestiones de legalidad, así como cuando, a la inversa, asuntos de legalidad se les yuxtapone la justicia constitucional”.⁴

En el presente caso se puede observar que los jueces lo que buscan, es una yuxtaposición de la justicia ordinaria con la justicia constitucional, ya que su análisis se circunscribe simplemente a la aplicación de normativa infraconstitucional y aspectos relacionados con temas contractuales.

A esta línea de razonamiento cabe añadir la doctrina constitucional expuesta por Karla Andrade Quevedo que destaca lo siguiente:

⁴ Gaceta Constitucional No. 5, de 27 de diciembre de 2013.



(...) existe una determinación casuística que nos da luces y nos permite determinar cuándo una vulneración de derechos se enmarca en el ámbito de lo constitucional. Del análisis de algunos de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, podemos concluir que las pretensiones relacionadas con la inconformidad respecto de montos a pagar; cuantificación de indemnizaciones por despido o destitución; **aplicación o cumplimiento de disposiciones contractuales**, antinomias entre normas de rango infraconstitucional o **errónea interpretación de una ley o reglamento no constituyen controversias susceptibles de acción de protección** puesto que, a pesar de estar relacionadas con algún derecho contenido en la Constitución, su afectación no acarrea la vulneración del mismo⁵. (Énfasis fuera del texto).

Por mandato de la jurisprudencia y la doctrina constitucional que antecede, inexorablemente le correspondía, en el presente caso, al juez tercero de trabajo y a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la contienda y dilucidar si se trata de un caso de jurisdicción constitucional o si por el contrario, por su naturaleza su conocimiento le corresponde a la justicia ordinaria; tarea que ha sido omitida en el presente caso, lo cual ha ocasionado inobservancia del precedente jurisprudencial obligatorio contenido en la sentencia N.º 001-10-PJO-CC, caso N.º 0999-09-JP, expedida el 22 de diciembre del 2010.

La referida jurisprudencia vinculante⁶, refiriéndose al conflicto relacionado con la procedencia de la **acción de protección**, expresó: “**57** (...) el juez constitucional (...) dejó sin efecto el acto –vía acción de protección– por violar normas legales, es el caso de los artículos 354, 355 y 342 de la Ley de Compañía, ámbito material de protección ajeno a la acción de protección y atinente a los mecanismos de justicia ordinaria. Tal como lo ha señalado esta Corte en ocasiones anteriores (...). **60** (...). Si vía acción de protección se impugna de manera exclusiva la legalidad del acto, sin que conlleve vulneración de derechos constitucionales, el asunto debe decidirse en los mecanismo judiciales ordinarios competentes, pero no a través de una garantía jurisdiccional”.

En armonía con lo establecido en la decisión referida, este Organismo en su sentencia N.º 016-13-SEP-CC del 16 de mayo de 2013, dictada dentro del caso N.º 1000-12-EP, fijó las reglas de cumplimiento obligatorio para las juezas y jueces constitucionales, estableciendo en lo pertinente que la competencia de la autoridad judicial en materia de garantías jurisdiccionales se concreta única y exclusivamente en la vulneración de derechos constitucionales más no, en aquellos problemas derivados de antinomias infraconstitucionales o ya sea,

⁵ Karla Andrade Quevedo. La acción de protección desde la jurisprudencia constitucional, en Manual de justicia constitucional ecuatoriana. Quito Ecuador 2013, pág. 129.

⁶ Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia N.º 001-10-PJO-CC, caso N.º 0999-09-JP.



respecto de impugnaciones relacionadas con las actuaciones de la administración pública que comporten la inobservancia o contravención de normas de naturaleza legal.

Adicionalmente, la Gaceta Constitucional N.º 5 del 27 de diciembre de 2013, manifiesta que “esta Corte ya ha señalado en ocasiones anteriores que si bien es claro que no es competencia de la justicia constitucional conocer asuntos de mera legalidad, es decir, el análisis de aspectos que son propios de la justicia ordinaria, si le compete a la justicia constitucional conocer los procesos, cuando ocurran vulneraciones a derechos constitucionales”⁷, circunstancia que no se observa dentro de la presente sentencia ya que los operadores de justicia utilizan argumentos relacionados con la aplicación o no de temas contractuales en lugar de analizar la vulneración de derechos más allá de la enunciación que realizan respecto al derecho a la propiedad.

Conforme ya se destacó en líneas anteriores y complementando lo expuesto, esta Magistratura Constitucional considera pertinente reiterar que la finalidad de la acción de protección de derechos constitucionales, tiene por objeto “el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución” (artículo 88 de la Constitución). Concordante con esta norma, el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que dicha acción tiene por objeto “el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos (...)”. Por lo tanto, al proponer acción de protección la compañía Hispana de Seguros S. A., era obligación de los jueces, tanto de primera como de segunda instancia, verificar si la autoridad u organismo accionado expidió algún acto o incurrió en omisión vulneratoria de derechos constitucionales, ya que esa fue la afirmación hecha por la compañía accionante en la demanda constitucional propuesta contra la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Ahora bien, la compañía Hispana de Seguros S. A., incurrió en negativa injustificada del pago de la póliza a favor del señor José Leonardo Abad Peñafiel, por lo cual, la resolución expedida por la junta bancaria ordenó a la aseguradora que pague la indemnización relacionada con la póliza N.º 0037674 (por siniestro de vehículo), hecho que de ninguna manera constituye acto vulneratorio de derechos constitucionales en contra de Hispana de Seguros S. A.

El debido proceso en la garantía del cumplimiento de las normas y derechos de las partes, exige a los justiciables, así como a los juzgadores, observar y aplicar la ley pertinente al caso concreto, en la especie, el artículo 42 numeral 1 de la Ley

⁷ Gaceta Constitucional N.º 5 del 27 de diciembre de 2013.



Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que dice: “La acción de protección de derechos no procede: 1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales”. Conforme queda analizado, la resolución de la junta bancaria no constituye acto violatorio de derechos constitucionales; por tanto, la acción de protección propuesta por la compañía Hispana de Seguros era improcedente en la vía constitucional, lo que así debió ser declarado por los jueces accionados. Sin embargo, al expedir la sentencia de primera y segunda instancia, los jueces no garantizaron el cumplimiento de la norma legal invocada y en consecuencia, incurrieron en vulneración del artículo 173 de la Constitución de la República, toda vez que, este indica la vía o canal jurisdiccional procedente, igualmente eficaz frente a los actos u omisiones de la autoridad pública que cause supuestos perjuicios de orden económico o pecuniario derivados del vínculo contractual.

De la revisión de la sentencia se puede observar que los argumentos expuestos por los jueces denotan un análisis infraconstitucional relacionado con aspectos contractuales lo cual no es propio de una acción de protección, desnaturalizándose su esencia, toda vez que no analizaron vulneración a derechos que es elemental en la acción de protección de derechos, al respecto cabe destacar lo que manifestado la Corte Constitucional:

La acción de protección no constituye un mecanismo de superposición o reemplazo de las instancias judiciales ordinarias, pues ello ocasionaría el desconocimiento de la estructura jurisdiccional estatal establecida por la Constitución (...) Tanto la doctrina como la jurisprudencia en materia de derecho constitucional sostienen que la acción de protección no es un medio que pueda sustituir las acciones judiciales ordinarias, pues ello conllevaría a la superposición de la justicia constitucional sobre la justicia ordinaria, así como al desconocimiento y a la desarticulación de la estructura jurisdiccional del Estado. Por lo que la acción de protección no procede cuando el titular del derecho vulnerado cuenta con la posibilidad real de acceder a una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita en la vía ordinaria⁸.

Una vez analizado el caso, se observa que los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en su sentencia, llevan a cabo un análisis de legalidad del caso ya que se citan elementos propios del contrato de seguros, por lo que pretenden que el juez constitucional resuelva un conflicto que no entra en la esfera de lo constitucional ya que como se mencionó anteriormente, existe una diferenciación entre la administración constitucional y la legal, existen las vías pertinentes y los mecanismos adecuados para que las controversias de carácter infraconstitucional puedan ser resueltas ya que el

⁸ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 016-13-SEP-CC caso N.º 1000-12-EP, expedida el 16 de mayo de 2013, publicada en el Registro Oficial Suplemento N.º 9 de 6 de junio del 2013.

simple hecho de la presentación de garantías no implica que nos olvidemos que existen cuestiones propias del ámbito de la legalidad.

Los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas realizan una valoración respecto a los elementos que nada tienen que ver con vulneración o no de derechos, inobservando la normativa constitucional, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la línea jurisprudencial de esta Corte Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento, particulares que no fueron considerados por los jueces para decidir, es decir no realizan un análisis en base a la vulneración o no de derechos, si no a temas de legalidad, por lo que al haber inobservado las normas claras que rigen la acción de protección de derechos, existe la vulneración de derecho a la seguridad jurídica.

Este criterio expuesto por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas también fue recogido por parte del juez tercero de trabajo del Guayas, quien también realizó una interpretación infraconstitucional y no ateniendo a vulneración de derechos constitucionales lo cual, denota que esta judicatura también generó una afectación al derecho constitucional a la seguridad jurídica, por desnaturalizar la esencia la acción de protección.

III. DECISIÓN

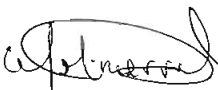
En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional, expide la siguiente:

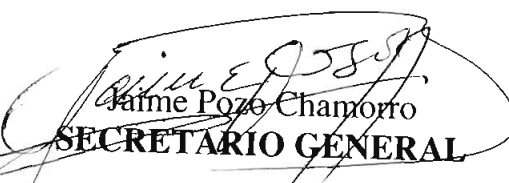
SENTENCIA

1. Declarar la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección propuesta.
3. Como medidas de reparación integral, esta Corte dispone:
 - 3.1. Dejar sin efecto la sentencia de mayoría expedida por los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas el 07 de febrero de 2011 a las 10h21, dentro de la acción de protección N.º 978-2010.
 - 3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada por el juez tercero de trabajo del Guayas, el 30 de noviembre de 2010 a las 10h10, dentro de la acción de protección N.º 0861-2010, y disponer el archivo de la causa.



4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.


Wendy Molina Andrade
PRESIDENTA (e)


Jaime Pozo Chamorro
SECRETARIO GENERAL

RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con cinco votos a favor, de las juezas y jueces Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote y Wendy Molina Andrade, sin contar con la presencia de los jueces María del Carmen Maldonado Sánchez, Tatiana Ordeñana Sierra, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire, en sesión de 05 de agosto del 2015. Lo certifico.


Jaime Pozo Chamorro
SECRETARIO GENERAL

JPCH/mbm/mbv

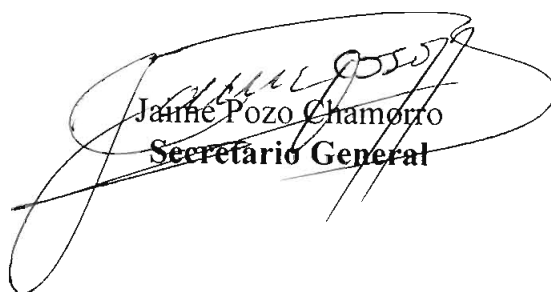




CORTE
CONSTITUCIONAL
DEL ECUADOR

CASO Nro. 1373-11-EP

RAZÓN.- Siento por tal, que la Jueza Wendy Molina Andrade, suscribió la presente sentencia el día martes 15 de septiembre del 2015, en calidad de presidenta (e) de la Corte Constitucional, al momento de expedirse la misma.- Lo certifico.


Jaime Pozo Chamorro
Secretario General

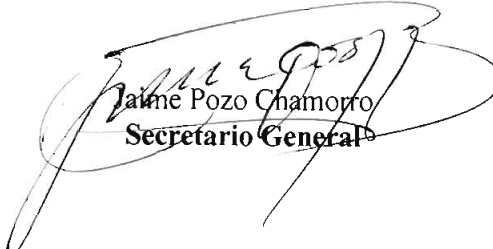
JPCH/LFJ



CORTE
CONSTITUCIONAL
DEL ECUADOR

CASO 1373-11-EP

RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los dieciséis y diecisiete días del mes de septiembre de dos mil quince, se notificó con copia certificada de la sentencia 249-15-SEP-CC, de 05 agosto de 2015, a los señores: Superintendencia de Bancos y Seguros, casilla constitucional 06; Procurador General del Estado, casilla constitucional 18; Hispana de Seguros S.A., casilla constitucional 406; Mirta Soraya Benítez Vargas, mediante correo electrónico benitez.mirta@hotmail.com; Jueces de la Sala penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, mediante oficio 3964-CCE-SG-NOT-2015, conjuntamente con los procesos que fueron remitidos a esta Corte; y, Unidad Judicial de Trabajo con sede en la ciudad de Guayaquil (Juzgado Tercero del Trabajo del Guayas), mediante oficio 3965-CCE-SG-NOT-2015; conforme constan de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-


Jaime Pozo Chamorro
Secretario General

JPCH/jdn



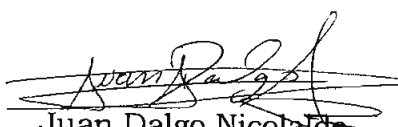
CORTE
CONSTITUCIONAL
DEL ECUADOR

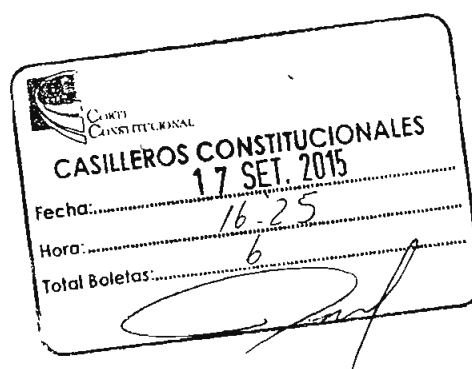
GUIA DE CASILLEROS CONSTITUCIONALES No. 460

ACTOR	CASILL A CONSTITUCION AL	DEMANDADO	CASILLA CONSTITUCION AL	NRO. DE CASO	FECHA DE RESO. SENT. DICT. PROV. O AUTOS
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	06	PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	18	1373-11-EP	SENT. 05 DE AGOSTO DE 2015
		HISPANA DE SEGUROS S.A.	406		
MYRNA MINUCHE FREIRE	440 Y 352	PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	18	0383-13-EP	SENT. 05 DE AGOSTO DE 2015

Total de Boletas: **(6) seis**

QUITO, D.M., 17 de septiembre del 2.015


Juan Dalgo Nicolalde
ASISTENTE DE PROCESOS





**CORTE
CONSTITUCIONAL**

De: Jair Dalgo
Enviado el: jueves, 17 de septiembre de 2015 16:15
Para: 'benitez.mirta@hotmail.com'
Asunto: SE NOTIFICA SENTENCIA DE 05 DE AGOSTO DE 2015
Datos adjuntos: 1373-11-EP-sen.pdf

[Número de página]



**CORTE
CONSTITUCIONAL
DEL ECUADOR**

Quito D. M., 15 de septiembre del 2015
Oficio 3964-CCE-SG-NOT-2015

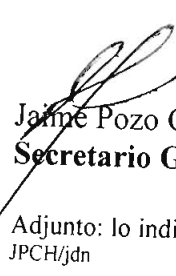
Señores

**JUECES DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL
GUAYAS**
Guayaquil.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 249-15-SEP-CC, de 05 de agosto de 2015, emitida dentro de la acción extraordinaria de protección 1373-11-EP, presentada por: Superintendencia de Bancos y Seguros. De igual manera devuelvo el juicio 978-10-B, constante en 81 fojas de la primera instancia, y en 24 y 21 fojas de la segunda instancia, a fin de dar cumplimiento la parte resolutive de la sentencia.

Atentamente,


Jaime Pozo Chamorro
Secretario General

Adjunto: lo indicado
JPCH/jdn





CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS

SALA ESPECIALIZADA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE GUAYAS

Juez(a): PAREDES FERNANDEZ JUAN AURELIO

No. Juicio: 09122-2010-0978(1)

Recibido el día de hoy, jueves diecisiete de septiembre del dos mil quince, a las doce horas y dieciseis minutos, presentado por CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR CON OFICIO NO. 3964-CCE-SG-NOT-2015 DEVUELVE JUICIO, JUICIO NO. 978-2010 EN DOS CUERPOS., quien solicita:

* DEVOLUCION DE PROCESO DE CORTE PROVINCIAL

En uno fojas y se adjunta los siguientes documentos:

1. Oficio

TORRES ESPINOZA LINDA MERCEDES

RESPONSABLE DE SORTEOS

Quito D. M., 15 de septiembre del 2015
Oficio 3965-CCE-SG-NOT-2015

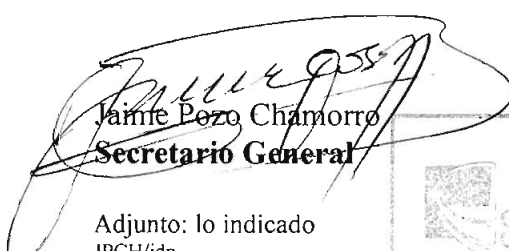
Señores

UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
(Juzgado Tercero del Trabajo del Guayas)
Guayaquil.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 249-15-SEP-CC, de 05 agosto de 2015, emitida dentro de la acción extraordinaria de protección 1373-11-EP, presentada por: Superintendencia de Bancos y Seguros, referente al juicio 0861-2010.

Atentamente,



Jaime Pezo Chamorro
Secretario General

Adjunto: lo indicado
JPCH/jdn





CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS

UNIDAD JUDICIAL DE FLORIDA DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN
GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS

Juez(a): DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO

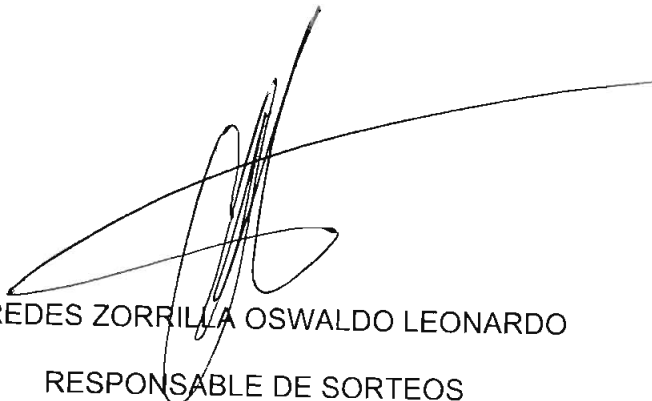
No. Juicio: 09353-2010-0861(1)

Recibido el día de hoy, jueves diecisiete de septiembre del dos mil quince, a las trece horas y veintisiete minutos, presentado por CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, quien solicita:

* PROVEER ESCRITO

En uno fojas y se adjunta los siguientes documentos:

1. Oficio



PAREDES ZORRILLA OSWALDO LEONARDO
RESPONSABLE DE SORTEOS